

Un nuevo escenario tras
el sismo de febrero:

Quo vadis, Chile



Jorge Navarrete P.

Abogado

Junto a sus trágicos efectos sociales y humanos, el terremoto también alteró con crudeza la agenda pública, modificando prioridades, restringiendo espacios a lo que no sea la tarea de reconstrucción y descomprimiendo expectativas ciudadanas.

Es imperativo que resolvamos la definición política más sustantiva: ¿qué bienes, en qué calidad y cantidad, estamos dispuestos a asegurar a cada uno de nuestros compatriotas? Esa respuesta es la que ordena una nueva ecuación entre Estado, mercado y persona.

La reciente tragedia que sacudió a nuestra patria se constituyó en una dolorosa prueba para la fortaleza de las instituciones y el talante de nuestros ciudadanos. La pena que nos ha acompañado desde entonces no solo tiene su origen en la dantesca destrucción que generó el terremoto o en los dramáticos testimonios de tantos que sufren en esta hora, sino que también se vincula a la imagen que de nosotros ha reflejado el espejo de esta jornada, imagen que dista mucho de lo que creíamos o deseábamos proyectar.

Las 3:34 horas de la madrugada

del 27 de febrero de 2010 marcarán un antes y un después en la historia de Chile. Al balance de los daños, con centenares de vidas arrebatadas, personas desaparecidas o familias sin hogar que lo perdieron todo, habrá que sumar esta vez una baja inesperada: la evidencia de una muy frágil conciencia moral colectiva y la debilidad de nuestra virtud republicana.

Sin embargo, y aunque en estos días tal vez pueda parecer poco pertinente, quisiera hacer un esfuerzo por no perder la perspectiva y poner en contexto el legado de las administraciones de la Concertación para, a continuación, identificar los desafíos que el nuevo Gobierno y la oposición tendrán en los próximos años.

LA CULMINACIÓN DE UN CICLO

Nadie con un mínimo de honestidad política e intelectual podría desconocer que la Concertación de Partidos por la Democracia fue la coalición más exitosa en la historia de Chile. No lo fue solo en términos electorales, lo que a estas alturas resulta obvio, sino también en razón de cualquiera de los índices por los cuales se mide el progreso de una nación: crecimiento económico, desarrollo de las libertades, solidez de sus instituciones o mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de los más pobres. Las cifras están a la vista, detallarlas sería ocioso. Pero, para resumir la envergadura de la tarea, bastaría con constatar que en los últimos veinte años Chile avanzó lo que antes tomaba algo más de medio siglo.

¿Qué explica, entonces, considerando la histórica cifra de popularidad del último Gobierno y de su presidenta Michelle Bachelet, que la Concertación haya sido derrotada en la última elección? Aunque las razones son muchas, quisiera apuntar a cinco cuestiones especialmente relevantes.

En primer lugar, y más allá de todos los significativos logros, quienes participamos de esa coalición no fuimos capaces de cumplir a cabalidad la

Será muy bajo el umbral de tolerancia ciudadana para las polémicas menores o los conflictos artificiosos.

promesa que le hicimos a la ciudadanía con motivo de la recuperación de la democracia. Sería muy injusto afirmar que el otrora oficialismo simplemente se limitó a prolongar un modelo económico y social heredado de la dictadura. Sin embargo, y con igual franqueza, el Chile del Bicentenario no es precisamente la sociedad igualitaria que soñamos a fines de la década de los ochenta. Desde esa perspectiva, una legítima duda se instaló en los ciudadanos: ¿era la Concertación todavía una fuerza de transformación y de cambio o, a estas alturas, solo una coalición de administración y conservación?

De igual manera, creo que uno podría hacer referencia a una fractura de los cimientos fundacionales. La Concertación construyó su legitimidad sobre dos grandes pilares: una mística que devenía de la lucha contra la dictadura y, a la par, la eficiencia en el diseño e implementación de sus políticas públicas. En algún sentido —habría que reconocer— los casos de corrupción estatal y la implementación deficiente de planes gubernamentales de gran impacto en los ciudadanos, dañaron severamente su imagen. A ratos, para muchos, la Concertación había abandonado la ética del testimonio y la ética de la eficiencia.

Tercero, y quizás como consecuencia de lo anterior, esta coalición careció de una épica renovada que convocara a los ciudadanos para que estos le reiteraran una vez más su confianza. Ya para la última elección municipal habían votado hombres y mujeres que nacieron bajo el Gobierno de Patricio Aylwin. A ellos, y a muchos otros no tan jóvenes, les dejó de hacer sentido un mensaje que se vanagloriaba de las dos décadas anteriores y que muy poco les decía sobre los veinte años que había por delante. En la ética y en la estética, esta ya era una coalición hija de otro tiempo y, por tanto, se sentía mucho

más orgullosa por lo que fue, que de lo que es o podría ser en el futuro.

A lo anterior se sumó el daño que provocó en sus filas la crisis de la política y el creciente descrédito ciudadano en que han caído los servidores públicos. Aunque se trata de una cuestión transversal, es evidente que dicho desprecio afectó más a quienes siempre procuramos defender la dignidad de esta actividad y poner de relieve al Estado como el principal instrumento de transformación social.

Por último —y quizás esto sea lo más relevante— no fuimos capaces de dimensionar el profundo legado social y cultural de la obra concertacionista. Somos testigos de una ciudadanía más diferenciada y autónoma, fragmentada en sus anhelos e intereses, más informada y consciente de sus derechos, que por lo mismo reclama de sus autoridades soluciones precisas y eficientes, las que no siempre el Estado y su elite gobernante han podido satisfacer. Para decirlo de otra forma, los líderes concertacionistas fueron víctimas de su propio éxito, pues no alcanzaron a leer los profundos cambios de una sociedad que ellos mismos contribuyeron a transformar. A ratos, estos dirigentes parecían extraños a una ciudadanía que poco tenía de aquella que nos vio crecer.

UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

En este escenario, evidentemente las cosas se facilitaron para Sebastián Piñera y los sectores políticos que lo secundaban. Sería injusto afirmar que el triunfo solo se sustentó en las deficiencias del derrotado y no, también, en los méritos de quienes triunfaron. Después de años en que las diferencias al interior de la derecha ocupaban más las páginas policiales que la crónica



Podremos discutir cuánto se prolongará la paciencia de los ciudadanos —lo que incluye las históricas demandas de sectores y movimientos todavía postergados—, pero pareciera que será más prolongada a lo originalmente previsto.

política, esta vez hicieron gala de una unidad encomiable.

A lo anterior habría que sumar una inteligente campaña electoral, cuyo norte fueron dos ejes que contribuyeron a generar más confusión en las huestes concertacionistas. Estos fueron poner el acento en la gestión y apropiarse de las banderas del otrora oficialismo. De esa forma, poco demoró Piñera en mostrarse como un ferviente partidario de la Protección Social, reivindicó la legítima intervención estatal y su rol regulatorio para un mercado cuyas imperfecciones acrecentaban la desigualdad y, como si fuera poco, desafió a una gran mayoría del sector que lo apoyaba, mostrándose partidario de la mayor autonomía de los ciudadanos en cuanto a cuestiones de carácter ético y moral.

Tal como lo ha expresado el Presidente, es obvio que la reciente tragedia alteró en buena parte las prioridades de su Gobierno. Con todo, aunque con algo de pudor todavía, muchos vislumbran una gran oportunidad para quienes hoy están en La Moneda, en la medida en que el terremoto tuvo importantes efectos políticos.

El primero y más evidente es que se allanó el camino para el “Gobierno de unidad nacional”, en la medida en

que la oposición tendrá poco margen para instalar cualquier tema que no se vincule a la tarea de la reconstrucción. Pese a los problemas que para cualquier administración representa un escenario donde no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras parlamentarias, será muy bajo el umbral de tolerancia ciudadana para las polémicas menores o los conflictos artificiosos.

A continuación, el nuevo Gobierno podrá descomprimir las enormes expectativas que se generaron durante la contienda electoral. La eficiencia y la mejor gestión son un discurso fácil de pronunciar, pero muy complejo de implementar. El Estado se mueve lento y su inercia es, a ratos, aplastante. Para qué decir sobre algunas de las promesas de campaña: el millón de empleos (es decir, doscientos cincuenta mil por año), el “SERNAC Financiero” para terminar con los abusos de los bancos, cerrar DICOM o resolver definitivamente los problemas de seguridad ciudadana, solo por nombrar algunas. Podremos discutir cuánto se prolongará la paciencia de los ciudadanos —lo que incluye las históricas demandas de sectores y movimientos todavía postergados— pero, de cara a las cuestiones que he señalado, pareciera que será

más prolongada a lo originalmente previsto.

EL ROL DE LA CONCERTACIÓN

Todo lo anterior impone un importante desafío para el rol de la Concertación fuera del poder. Tendrá que ser muy diestra en buscar un justo equilibrio y ser una oposición constructiva que colabore en la tarea de reconstrucción, pero que no pierda de vista que está al otro lado de la vereda. A diferencia de lo que la derecha hizo en la oposición, ahora la Concertación deberá marcar la diferencia en el aporte y la proposición. Su norte será velar porque se profundice el legado social que instaló durante estas dos décadas, poniendo especial atención en el resguardo de la fe pública y en que no se diluyan las fronteras de lo que interesa al bien común y al sector privado.

Con todo, a ratos pareciera que sus integrantes estamos todavía lejos de afinar un diagnóstico común, en especial en lo que atañe a las causas que motivaron la derrota. La fuente de las discrepancias, la pérdida de afectos o la descomposición de la clase política concertacionista tienen su origen en la ausencia de una unidad de propósitos. Esta fue una coalición que se hizo grande en la lucha contra la dictadura

y cuyo principal objetivo fue reinstalar la democracia. Esto evidentemente postergó el debate en torno a muchas y profundas diferencias al interior de ella. La oportunidad de reconstruir un relato colectivo se juega ahora en la comunión de fuertes convicciones políticas, sociales y morales.

Será un proceso largo y doloroso. Sin embargo, resulta indispensable para reconstruir un cuerpo crítico, con sólidos y coherentes fundamentos en su proyecto político, donde esta coalición dé cuenta de un nuevo sueño para el Chile del futuro. De igual manera, y saldando en algo la deuda que ella tiene con su historia, será imprescindible invertir en el capital humano, la organización comunitaria o el tejido social. Esta no será la tarea de unos pocos iluminados. Por el contrario, la posibilidad de levantarse y proponer una alternativa que seduzca y convoque a las mayorías ciudadanas solo podrá acometerse mediante una amplia participación social. Quienes aspiren a liderar esta nueva etapa deben estar menos entusiasmados en hablar y, por el contrario, muy dispuestos a escuchar.

LA NUEVA Y VIEJA LACRA DE LA DESIGUALDAD

Vivimos una época de grandes

incertidumbres. A los desafíos propios de un mundo globalizado, donde el cambio climático destaca como uno de los retos más significativos, hemos debido sumar la fragilidad del sistema financiero internacional, la demanda por mayor seguridad o lo impredecible de nuestra naturaleza. Todo lo anterior, se da en el marco de una ciudadanía que escruta con mayor acuciosidad a sus servidores públicos y cuyas demandas de hoy ya no posible atender con las recetas de ayer.

Lo anterior obliga a levantar la mirada y a pensar en más y mejores herramientas que se hagan cargo de los viejos y nuevos problemas de nuestra sociedad. Tal como alguna vez lo expresó el presidente Ricardo Lagos, “ya no basta con prometer el pan, ahora este tiene que ser apetitoso”. Detrás de esa metáfora subyace el mayor de los desafíos para la Concertación, el motivo de muchos desvelos y del centro de la acción política: la lucha contra la desigualdad.

Aunque con menos dramatismo que antaño —quiero advertir—, sigue siendo cierto que cuando le preguntamos a una persona dónde vive en la ciudad de Santiago, esta, al responder, probablemente nos esté contestando cinco o seis preguntas a la vez. Todavía hoy es posible, a partir de la información de dónde reside alguien en nuestra capi-

Los líderes concertacionistas fueron víctimas de su propio éxito, pues no alcanzaron a leer los profundos cambios de una sociedad que ellos mismos contribuyeron a transformar.



tal, hacer un cálculo aproximado del rango de su ingreso promedio; lo que a su turno se relaciona directamente con la posibilidad que tuvo, o no, de estudiar una carrera profesional o técnica; lo que se vincula a si estudió en un colegio particular o en uno público o subvencionado; lo que a todas luces, además, estuvo determinado por las posibilidades económicas de sus padres. Muchas veces, el lugar donde uno vive en Santiago, determina si se posee cuenta corriente e, incluso, en qué banco se dispone de esta.

La pregunta entonces es cómo romper este círculo perverso; cómo hacer para no transformar en una irremediable tragedia familiar el que un jefe o jefa de hogar pierda temporalmente su trabajo; cómo concretar, y de verdad, la promesa de que el mérito y el esfuerzo le permitirá a un chileno surgir más allá del infortunio de la lotería de la vida.

La noción de igualdad excede con

mucho a la clásica y formal noción jurídica. No se trata a las personas de forma igual cuando se les pone a todos en el mismo lugar al inicio de una carrera, en condiciones de que algunos deben correr vendados, otros amarrados y muchos más observan con desazón cómo su pista está plagada de obstáculos.

Es imperativo que resolvamos una pregunta todavía pendiente en Chile y que se refiere a la definición política más sustantiva que un país puede hacerse colectivamente: ¿qué bienes, en qué calidad y cantidad, estamos dispuestos a asegurar a todos y cada uno de nuestros compatriotas?

Esa respuesta, ese nuevo consenso social, es el que ordena y dibuja una nueva ecuación entre Estado, mercado y persona. Solo la claridad en esa respuesta es lo que permite conjugar el necesario e indispensable crecimiento económico, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de las libertades. Es justamente

la definición de ese catálogo de garantías lo que nos permite pensar en el tipo de Estado que queremos, la forma y profundidad de nuestras políticas públicas o su estructura de financiamiento.

Pero nada de esto se podrá hacer si no ponemos mayor cuidado en la dignificación de la política y en el fortalecimiento de nuestra democracia. A las ya recurrentes quejas por el sistema electoral, la forma y organización de los partidos políticos, la necesidad de ampliar el universo de los ciudadanos que puedan votar o la urgente tarea de modernizar el Estado, generando mayores instancias de fiscalización y control, debemos agregar aquellas propuestas que discurren por la mayor transferencia de poder a los ciudadanos, el plebiscito, la iniciativa popular de ley o los cambios al régimen institucional.

Queda mucho por hacer y, en algún sentido, debemos empezar de nuevo.

MSJ

